

AUTOS: A.E.R.D.L.S.Z.I.D.C.C.P.F.S.V.(3.

EXPEDIENTE N.º CA-00573-JP-2026

Catriel, a los 24 días del mes de septiembre del año 2026.-

Visto la denuncia formulada de manera anónima en la Comisaría de la Familia de esta ciudad el día 21 de septiembre del 2026 en representación de la Sra. ZILLI INES DEL CARMEN contra el Sr. FEDERICO PEÑAILILLO.-

CONSIDERANDO:

I.- Que la presente resolución se dicta bajo el imperativo de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al ratificar la CONVENCIÓN DE BELEN DO PARÁ y la CEDAW, que imponen el deber de actuar con debida diligencia reforzada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En este sentido, y de conformidad con el Art. 156 del Código Procesal de Familia Ley 5396 de la Provincia de Río Negro, estas convenciones resultan de aplicación directa para revertir las asimetrías históricamente construidas que vulneran el derecho a una vida libre de violencias.-

II.- Siguiendo lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en la Acordada 06/23, la perspectiva de género no es una opción, sino una herramienta metodológica obligatoria para la magistratura, destinada a detectar situaciones de desigualdad y corregirlas a través de la interpretación de la ley, evitando análisis sesgados por estereotipos.-

III.- Que este Juzgado de Paz interviene en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 139 del CPF (RN), el cual le otorga competencia para recibir denuncias y adoptar medidas urgentes en el marco de la violencia familiar y de género. Esta competencia descentralizada garantiza la tutela judicial efectiva, permitiendo que la respuesta jurisdiccional sea inmediata en el lugar donde ocurre el conflicto, conforme los principios de celeridad e inmediación.-

IV.- Que los hechos denunciados deben ser analizados bajo el prisma de la Ley 4241, la cual establece un marco de protección integral frente a la violencia familiar:

En este sentido, la violencia es entendida como una problemática social caracterizada por conductas que, basadas en el afianzamiento de roles de dominación dentro de la familia, provocan daños y conductas sintomáticas en quien las padece. Asimismo, conforme al Artículo 6, se define como violencia *"toda acción, omisión o conducta que, de manera directa o indirecta, afecte la vida, libertad, dignidad o integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las personas"*. entendiéndose —según el glosario de la Ac. 06/23— que la violencia psicológica causa un daño a la salud emocional y la autodeterminación, mientras que la económica y patrimonial se dirige a menoscabar los recursos necesarios para la subsistencia o el control de los bienes propios.-

Que, respecto a la modalidad, el Artículo 7 circunscribe la aplicación de esta norma al ámbito de las relaciones familiares, entendiéndose por tal aquella ejercida por un integrante del grupo familiar, con independencia del espacio físico donde ocurra. Este vínculo incluye el parentesco por consanguinidad o afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho, las parejas o noviazgos, incluyendo relaciones vigentes o finalizadas, y resaltando que la convivencia actual no es un requisito indispensable para la procedencia de la acción.-

Que, en igual sentido, el Artículo 8° de la norma citada detalla, de manera enunciativa, los distintos tipos de violencia familiar, abarcando no solo la física (conductas destinadas a dañar la integridad corporal), la psicológica y emocional (acciones que provocan traumas, sufrimiento o perturbaciones a través de amenazas, intimidación o aislamiento), sino también la sexual (afectación a la libertad y autodeterminación) y la económica (restricción al control de bienes, propiedad o el incumplimiento de deberes alimentarios que pongan en riesgo el bienestar de los hijos menores).-

Asimismo, el Artículo 9° delimita las distintas modalidades que asume este flagelo dentro del seno familiar, clasificándolo según el sujeto afectado en violencia conyugal (contra la pareja), maltrato infanto-juvenil (que altera el desarrollo evolutivo de niños, niñas y adolescentes), maltrato a ancianos y maltrato a personas con discapacidad; categorías todas orientadas a identificar y neutralizar de forma específica el menoscabo a la integridad de los miembros más vulnerables del grupo familiar.-

V.- Que la denuncia fue formulada por persona de identidad reservada en representación de la Sra. ZILLI. Que al tratarse de una víctima mayor de edad, la normativa aplicable

exige citarla a fin de ratificar los hechos expresados, informarla sobre sus derechos procesales y sustanciales, y ponderar el ejercicio de su autonomía de la voluntad.-

VI.- Que la Sra. ZILLI no pudo comparecer a la audiencia fijada al efecto por encontrarse cursando una internación en el Hospital local.-

VII.- Que esta circunstancia no obsta al dictado de la tutela judicial efectiva. En el análisis de situaciones de violencia prevalecen los principios de amplitud probatoria y flexibilidad procesal. Aunque la palabra de la víctima resulta determinante, la imposibilidad momentánea de ratificar la denuncia no debiera paralizar la actuación judicial ni impidió la adopción de medidas urgentes de resguardo cuando existen indicadores de riesgo que exigen neutralizar cualquier amenaza o revictimización.-

VIII.- Que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 138 del CPF (RN) y las directrices fijadas en el protocolo de la Acordada N° 15/2022-STJ, ante la presencia de elementos que sugieran la presunta comisión de un delito de acción pública, corresponde dar intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal.-

IX.- Que, con base en el Art. 140 inc. c y Art. 148 del CPF (RN), se disponen medidas de protección inaudita parte con carácter de medidas autosatisfactivas, orientadas al cese inmediato del riesgo. Al notificarlas, se informará al denunciado sobre la obligatoriedad de contar con patrocinio letrado para la continuidad del proceso, asegurando el debido proceso legal.-

X.- Que se hace saber a las partes que el incumplimiento de las órdenes judiciales, mediando clara intención de violar las prohibiciones, dará lugar a la vista inmediata al Ministerio Público Fiscal por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, conforme al Art. 154 del CPF y lo ratificado en la Ac. 15/2022.-

XI.- Que, habiéndose adoptado las medidas urgentes, corresponde remitir las actuaciones a la Oficina de Tramitación Integral de Familia (OTIF) para el sorteo correspondiente y radicación definitiva ante el Juzgado de Familia, instancia que resolverá sobre la ratificación, sustitución o cese de las medidas dispuestas, conforme el Art. 140 y 146 del CP.-

XII.- Que atento los antecedentes expuestos, la situación de riesgo, y al solo efecto de resguardar la integridad física y psíquica de la presunta víctima; **RESUELVO:**
RATIFICAR LA MEDIDA ORDENADA VÍA TELEFÓNICA EL DÍA 21 DE

SEPTIEMBRE Y EN CONSECUENCIA:

1º) Ordenar la PROHIBICIÓN DE CONTACTO y la PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO del Sr. F.P. respecto de la Sra. I.D.C.Z. debiendo mantenerse alejado a una distancia no menor a quinientos metros de la persona y residencia de la denunciante, como así de los lugares en que se encuentre o transite sean públicos o privados. Asimismo deberá, el denunciado, abstenerse de producir actos molestos o de hostigamiento cualquiera sea el medio que se utilice (Art. 148 Inc. D CPF).-

2º) El plazo de la presente medida quedará sujeto a lo que disponga la Unidad Procesal que por sorteo corresponda.-

3º) Dar vista en la causa a la Fiscalía Descentralizada de la Ciudad de Catriel, a cuyo fin incorpóresela como interviniente en el proceso, bajo debida constancia.-

4º) Asimismo se hace saber a V.S. que las partes ya han sido informadas que durante la sustanciación del proceso judicial deberán contar con patrocinio letrado, pudiendo requerir el servicio de Defensa Pública. Regístrese, protocolícese. Cumplido remítanse las presentes actuaciones a OTIF.-

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

DELGADO DANIEL ALBERTO - JUEZ DE PAZ

GONZÁLEZ BÁRBARA DANIELA - SECRETARIA